

Perspectivas #140

El apoyo a castigos más severos para criminales es mayor entre los más jóvenes, quienes se sienten inseguros, las víctimas de la delincuencia y quienes confían poco en la policía

Sophie Price, Stella Sechopoulos y James Whitty, con LAPOP
Vanderbilt University

18 de junio de 2019

Hallazgos principales:

- La edad está negativamente correlacionada con el apoyo a políticas públicas punitivas; entre otros factores, este es el predictor más fuerte del menor apoyo a castigos más severos para los criminales.
- Las mujeres respaldan ligeramente más que existan castigos fuertes para los criminales.
- Ser víctima de un crimen aumenta apoyo a políticas públicas punitivas.
- La inseguridad está positivamente correlacionada con el apoyo a castigos más fuertes para los criminales.
- Quienes tienen menos confianza en la policía respaldan menos las políticas públicas punitivas.



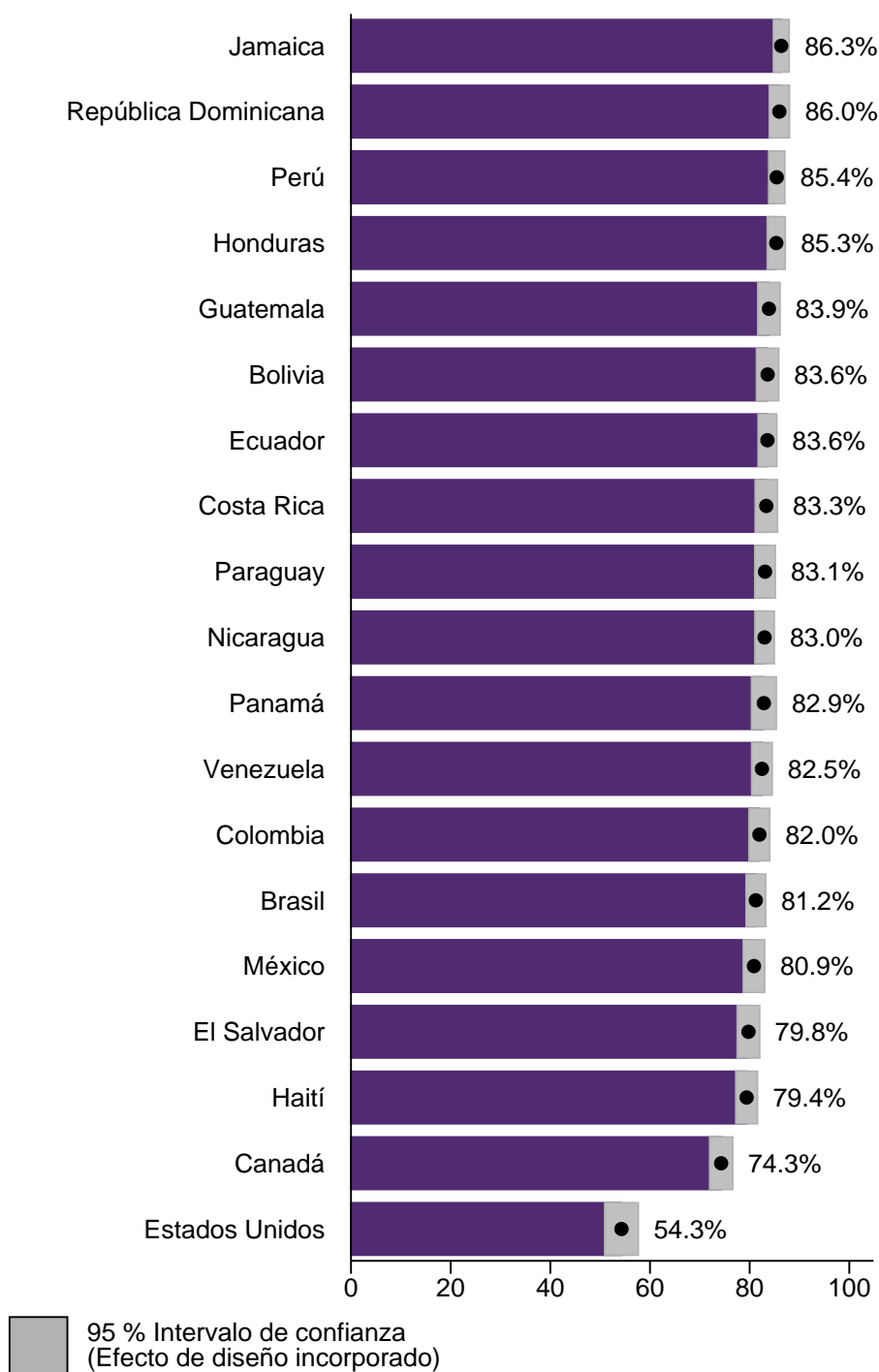
A pesar de los esfuerzos gubernamentales para controlar el crimen en América Latina y el Caribe (ALC), persisten altas tasas de victimización y muchos en la región expresan altos niveles de miedo^{1 2}. Sin embargo, los expertos no coinciden en diversos temas relacionados con la criminalidad, el sistema de justicia penal, y las estrategias más efectivas para castigar a los criminales. Respecto a este último aspecto, existe un debate sobre cuáles métodos de castigo son más apropiados y efectivos. La región ha visto un aumento en la encarcelación masiva y varias reformas relacionadas, y aun así las personas a lo largo de ALC piden mayores acciones para combatir la criminalidad³. En este reporte de *Perspectivas*, se analiza la opinión pública en las Américas sobre el deseo de castigos más fuertes como una solución a la criminalidad. Para realizar el análisis, se usan datos del Barómetro de las Américas 2016/17 de LAPOP⁴, y el análisis se enfoca en una pregunta sobre política criminal:

AOJ22NEW: Para reducir la criminalidad en un país como el nuestro hay que aumentar los castigos a los delincuentes. ¿Hasta qué punto está de acuerdo o en desacuerdo con esta frase?

Apoyo a estrategias más punitivas frente a la delincuencia en las Américas

El Gráfico 1 muestra el porcentaje de adultos en las Américas que están de acuerdo con que, para reducir el crimen, se deben aumentar los castigos a los criminales. En el gráfico, cada país se representa con una barra que muestra el porcentaje (como indica el eje x) de entrevistados de ese país que están de acuerdo con aumentar el castigo a los criminales⁵. El gráfico también incluye el intervalo de confianza de 95 % para cada estimación del porcentaje, indicado con el área gris.

Jamaica tiene el porcentaje más alto de personas que están de acuerdo con aumentar los castigos a los criminales (86.3 %), y Estados Unidos muestra la tasa más baja de acuerdo (54.3 %). Curiosamente, los países de ALC muestran poca variación: todos se ubican en el rango entre 86.3 % y



Fuente: © Barómetro de las Américas por LAPOP, 2016-17; GM v07172017

Gráfico 1: Apoyo a castigos más severos para criminales en las Américas

79.4 %. En otras palabras, a lo largo de ALC, hay un alto nivel de acuerdo con aumentar el castigo a los criminales. El nivel de acuerdo en Canadá también es relativamente alto, alcanzando 74.3 %. Estos resultados indican una diferencia significativa en la forma como las personas en Estados Unidos piensan sobre la justicia criminal y el castigo/reforma, por un lado, y las actitudes entre los ciudadanos de América Latina, el Caribe y Canadá, por otro lado. Mientras que esta brecha es importante, en lo que sigue, este reporte se concentra en los predictores individuales del apoyo a castigos más severos en ALC.

La edad es un predictor fuerte de las actitudes punitivas

En teoría, varios factores socioeconómicos y demográficos - en particular, el género, la edad, la riqueza, la raza/etnicidad y la educación - pueden predecir actitudes más punitivas. Para comenzar, investigaciones anteriores sugieren que las mujeres en Estados Unidos podrían favorecer una justicia menos punitiva⁶, sin embargo, hay al menos dos razones para pensar que las mujeres en ALC, en promedio, reportarían mayor apoyo a castigos más fuertes para los criminales. Primero, Miller, Rossi y Simpson (1986) identifican que la proximidad subjetiva de un grupo con la criminalidad es una variable significativa al predecir las opiniones sobre el castigo de los delincuentes condenados. En particular, ellos argumentan que mientras que un grupo tenga más probabilidad de percibirse como el blanco de la delincuencia, este grupo estará más inclinado a favorecer sentencias más severas. Las mujeres tienen razones para temer a la criminalidad en ALC: por ejemplo, América Latina contiene siete de los diez países con las tasas más altas de asesinatos de mujeres en el mundo⁷. De hecho, investigaciones anteriores muestran que las mujeres en ALC tienen una mayor probabilidad de temer a la delincuencia⁸. Segundo, las investigaciones han mostrado que las mujeres en ALC con frecuencia tienen preferencias sociales y políticas más conservadoras que los hombres⁹.

También se considera la raza y la etnicidad como posibles predictores de las actitudes punitivas. Investigaciones enfocadas en Estados Unidos sugieren que existe una “brecha racial” cuando se trata de las actitudes punitivas, donde los blancos tienen más probabilidades que los negros de apoyar castigos más severos¹⁰. Similar a Estados Unidos, los países de América Latina y el Caribe muestran patrones de discriminación y marginalización de los ciudadanos negros e indígenas¹¹. Siguiendo las investigaciones anteriores, postulamos que los grupos marginales van a preferir políticas públicas más liberales en lo que se refiere a las preferencias sobre el castigo a los criminales. Así, se espera que las personas que se autoidentifican como negros o indígenas van a expresar menos apoyo a las políticas punitivas cuando se comparan con un grupo que no ha experimentado la misma historia de discriminación y marginalización (e.j., los blancos).

Además, algunos trabajos sugieren que el paso de los años está asociado con la disminución en las actitudes punitivas. El riesgo de victimización por el crimen es mayor en las primeras etapas de la vida y disminuye con el paso del tiempo¹². Un reporte del Banco Mundial sobre el crimen en la región encontró que los jóvenes constituyen “la mayoría, tanto de víctimas como de victimarios de la violencia” en la región¹³, lo cual sugiere que los más adultos podrían verse de alguna manera como aislados de este problema que se concentra mayormente entre los jóvenes. Como se mencionó, en la medida que los miembros de un grupo se vean como víctimas potenciales, estas personas podrían favorecer sentencias más severas¹⁴. Podemos especular que la edad disminuye el apoyo a mayores sentencias en la medida que los más adultos tienen menor probabilidad de experimentar sentimientos de inseguridad, y por tanto, están menos inclinados a respaldar castigos más fuertes.

Se considera niveles más elevados de educación como posibles predictores de una opinión más benévola sobre los castigos. Bobo y Licari (1989) argumentan que una mayor educación aumenta tanto la tolerancia en general como hacia los derechos de grupos poco ortodoxos o rechazados, como podríamos clasificar a los condenados. Esto tiene un alcance limitado, sin embargo, en la medida que los autores encuentran que di-

cha tolerancia solo existe mientras que el grupo en cuestión “no sea una amenaza extraordinaria o extrema”, por lo que el tipo de crimen cometido podría ser significativo al determinar la tolerancia.

Finalmente, también se considera el nivel de riqueza y la residencia urbana/rural como posibles predictores del apoyo a políticas públicas punitivas. Algunos investigadores han encontrado que las personas con mayores recursos y quienes viven en las grandes ciudades tienen más probabilidades de temer y/o ser víctimas de la delincuencia¹⁵. Asumiendo que quienes están más en riesgo preferirán políticas más severas, se anticipa que las personas con más riqueza y quienes viven en ciudades tienen una mayor probabilidad de apoyar políticas públicas punitivas.

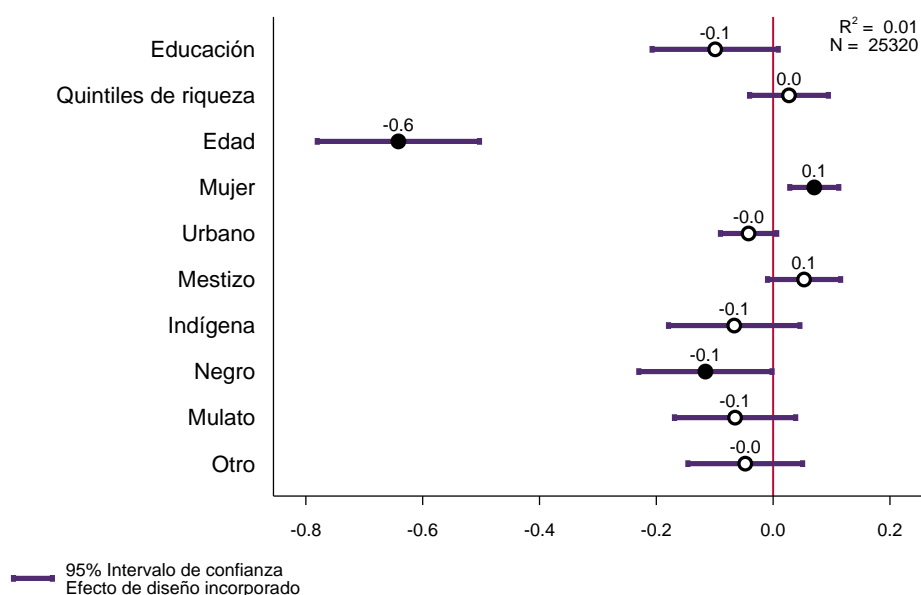


Gráfico 2: Predictores sociodemográficos y económicos de actitudes punitivas

El Gráfico 2 muestra los resultados de un análisis de regresión lineal en el que se predice la variable dependiente (apoyo a castigos más severos a los criminales) con un conjunto de seis características personales: género, raza/etnicidad, edad, riqueza, urbano/rural y educación. Cada variable

independiente se codifica en una escala de 0 a 1, donde 1 indica “más” en cada variable. La variable dependiente se codifica en la escala original de 1-7, donde 7 indica un apoyo fuerte a castigos más agresivos como estrategia para reducir la criminalidad. Las variables independientes se muestran en el eje vertical y la relación estimada con la variable dependiente se muestra en el eje x. Los puntos a la derecha de la línea roja vertical indican coeficientes positivos y correlaciones. Cada coeficiente se ilustra junto a una línea horizontal que indica el intervalo de confianza de 95 % para esa estimación. Cuando esa barra se cruza con la línea roja vertical, indica que el coeficiente no es estadísticamente significativo¹⁶.

Como se esperaba, hay una relación positiva entre ser mujer y estar de acuerdo con que los castigos para los criminales deben aumentarse para reducir la delincuencia: las mujeres expresan actitudes que son 0.1 puntos (en una escala de 1 a 7) más punitivas. Adicionalmente, comparado con quienes se identifican como blancos (la categoría de referencia), las personas que se identifican como negros¹⁷ tienen menos actitudes punitivas: el modelo estima actitudes que son 0.1 puntos menos favorables a castigos más severos a los criminales. Llama la atención que identificarse como indígena no tiene efecto en las actitudes punitivas, lo cual contradice la predicción de que los grupos marginalizados apoyarán menos las políticas públicas punitivas. Los coeficientes para los otros grupos raciales (mulatos, mestizos, otros) tampoco son predictores estadísticamente significativos de las actitudes hacia los castigos más fuertes para los criminales. La edad, como se argumentó, es un predictor significativo de las opiniones sobre la delincuencia y el castigo a los delincuentes con un coeficiente negativo de -0.6, indicando que las personas más adultas se muestran 0.6 puntos menos favorables a castigos más fuertes como solución a la delincuencia. Finalmente, el Gráfico 2 muestra que el nivel de riqueza, urbano/rural y la educación no están relacionados significativamente con las actitudes sobre castigos más fuertes para los criminales, en oposición a lo que se había especulado.

Delincuencia, inseguridad y confianza en la policía predicen el apoyo a castigos más fuertes para los criminales

Para poner a prueba un modelo más completo del apoyo a castigos más fuertes para los criminales, se expande el modelo para incluir medidas de victimización por delincuencia, inseguridad y confianza en la policía. En esta sección, se reportan las expectativas para estas medidas, los resultados de un análisis que pone a prueba su relevancia, y sugerencias para futuras investigaciones sobre este tema.

La victimización por delincuencia puede estar asociada con el apoyo a estrategias más agresivas frente a la justicia criminal. Riggs y col. (1992) encuentran que la victimización por el crimen aumenta los niveles de rabia entre las víctimas, un sentimiento asociado tanto con la ansiedad como con el desorden de estrés postraumático (PTSD). Horowitz (1986) argumenta que las víctimas tienen que procesar la información relacionada con el trauma con el fin de reconciliarla con nociones preexistentes sobre la seguridad, lo cual quiere decir que estas experiencias personales se integran con las percepciones del mundo de las víctimas y las actitudes de éstas hacia la delincuencia en general. Una consecuencia del proceso de asimilación entre las víctimas puede ser expresar un mayor apoyo hacia políticas públicas punitivas. De hecho, Bateson (2012) encuentra que las personas que han sido víctimas de la delincuencia prefieren estrategias policiales más agresivas y tienen una mayor probabilidad de participar en el proceso político, un comportamiento impulsado por el deseo de cambiar el estatus quo. Esta investigación se alinea con el argumento según el cual la victimización por la delincuencia aumenta los sentimientos de rabia y frustración, lo cual moviliza a las víctimas. Aún más, Johnson (2009) encuentra una relación significativa y positiva entre la rabia por la criminalidad y el apoyo por políticas públicas punitivas más agresivas¹⁸. En resumen, se sospecha que las víctimas de la delincuencia, habiendo experimentado este trauma, estarán más inclinadas a apoyar políticas públicas más fuertes en contra de los victimarios.

Varios investigadores han examinado la conexión entre las actitudes individuales hacia las políticas punitivas, por un lado, y el miedo a la victimización (inseguridad) y contextos inseguros, por otro lado. Los estudios sobre el aumento de las políticas públicas punitivas en Estados Unidos en los 90s muestran que el miedo a la criminalidad y las campañas políticas agresivas que aumentaron el pánico público sobre la criminalidad fueron factores significativos que afectaron el apoyo público a castigos más fuertes para la criminalidad¹⁹. Adicionalmente, un estudio por d'Anjou y col. (1978) encuentra que hay una relación positiva entre el apoyo a mayores castigos y el miedo a la victimización. En resumen, las personas que se sienten amenazadas favorecen mayores castigos y son más agresivas, sugiriendo que independientemente de las tasas de criminalidad reales, estas percepciones se van a manifestar en mayor apoyo a castigos más fuertes a la delincuencia. En últimas, se espera que un nivel más alto de inseguridad y de miedo a ser victimizado predican mayor apoyo a políticas punitivas y castigos más severos.

La confianza en la policía puede influir en las opiniones de las personas sobre cómo debieran actuar las autoridades frente a los criminales. Las investigaciones sugieren que la confianza en la policía está moldeada por las experiencias personales y la interacción con la policía, donde menos confianza en los agentes de policía lleva a desconfiar de la organización con la que se les asocia²⁰. Se anticipa que las personas verán a la policía como la cara del sistema de justicia criminal. Asumiendo que menor confianza en la policía está correlacionada con menos confianza en el conjunto del sistema de justicia, se espera que las personas que no confían en la policía también van a desconfiar de las estrategias punitivas. Se espera que menos confianza en la policía puede llevar a las personas a buscar que otras instituciones resuelvan el problema de la delincuencia, alejándose de las políticas punitivas, las cuales podrían estar asociando con la policía y otras instituciones relacionadas.

Dado que las expectativas y la literatura presentada arriba, se analiza la medida en la que las siguientes variables predican actitudes punitivas: victimización por delincuencia²¹, inseguridad²², y *menos* confianza en la policía²³. Usando estas nuevas variables, se realizan otras regresiones en

el apoyo a castigos más severos. Los resultados del análisis, los cuales también incluyen las medidas mostradas anteriormente en el Gráfico 2, se presentan en el Gráfico 3.

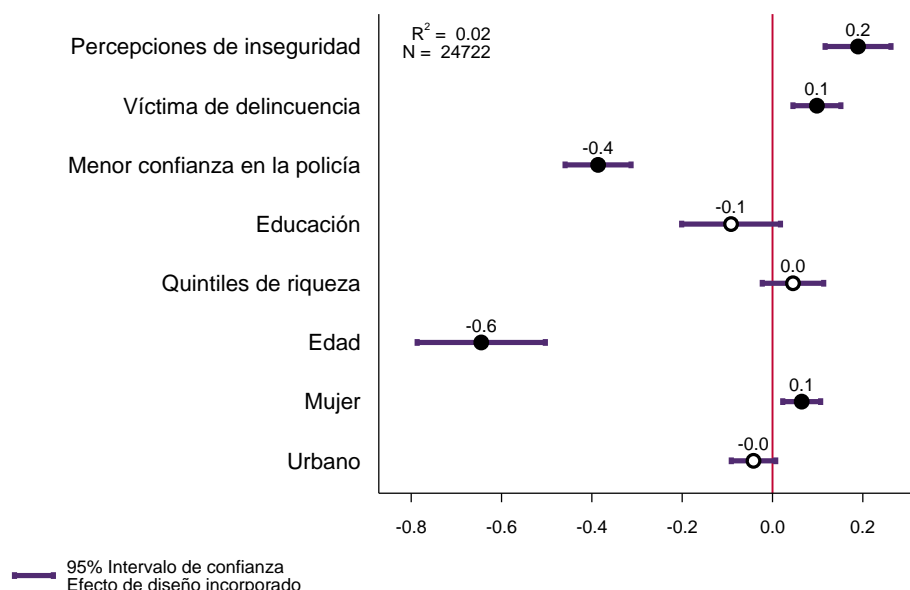


Gráfico 3: Predictores sociodemográficos, económicos y políticos de actitudes punitivas

Como se muestra en el Gráfico 3, los resultados respaldan la predicción de que las víctimas de la delincuencia respaldan políticas punitivas. Como explican Riggs y col. (1992), la victimización por el crimen lleva a experimentar trauma, rabia y ansiedad. Estas emociones y experiencias parecen traducirse en preferencias en tema de políticas públicas de las personas. Es necesario destacar que la relación encontrada en el análisis entre victimización por el crimen y apoyo a castigos más severos a los criminales, aunque positiva, no es particularmente fuerte en términos substantivos (el valor del coeficiente es 0.1). Dados los diferentes tipos de crímenes que esta variable involucra, es necesario realizar investigaciones adicionales sobre esta relación para tener una comprensión más clara del efecto de la victimización en las preferencias de las personas.

Los hallazgos también respaldan la expectativa de que una mayor inse-

guridad va a provocar una reacción agresiva: la percepción de amenaza de la delincuencia y la inseguridad está significativa y positivamente correlacionada con el apoyo a castigos más severos a los criminales. Específicamente, los resultados muestran que las personas que están más (versus menos) inseguras muestran 0.2 puntos más de apoyo a las políticas públicas punitivas. Este resultado está en línea con las investigaciones realizadas por otros, tales como el trabajo de d'Anjou y col. (1978), quienes encuentran que el miedo a la victimización es un predictor de actitudes punitivas.

La expectativa de que menos confianza en la policía estaría asociada con menos apoyo a castigos más fuertes encuentra respaldo en estos resultados. El coeficiente es negativo con un valor de -0.4. Esto respalda el argumento de que menos confianza en la policía podría llevar a que las personas desconfíen del sistema de justicia y lo encuentren incompetente para resolver el problema de la criminalidad sin contar con sentencias más fuertes. Esto es, se estima que menos confianza en la policía va a disminuir la dependencia en la disuasión de los criminales y el cumplimiento riguroso de la ley como opciones. Se interpreta el hallazgo de una correlación negativa entre confianza en la policía y las preferencias por castigos más fuertes como una manifestación de una dinámica subyacente más general.

Se observa que, después de agregar estas variables, la edad permanece como un factor importante para predecir las actitudes punitivas. De hecho, la edad tiene una relación más fuerte con las actitudes punitivas que todas las demás variables; incluso en este modelo ampliado, la edad sigue estando significativamente correlacionada negativamente con el apoyo a castigos más fuertes a los criminales. Específicamente, las personas más adultas respaldan castigos más fuertes 0.6 puntos menos como una solución a la delincuencia, comparados con la cohorte más joven²⁴.

Dicho esto, la explicación inicial para esta correlación pierde apoyo con este modelo de regresión. Se argumentaba que las personas más adultas tienen menos probabilidad de ser victimizadas por la delincuencia y, dada la relación positiva identificada entre la victimización y el apoyo a

políticas punitivas, se esperaba que esto se tradujera en que las cohortes más adultas tuvieran menos apoyo a estrategias punitivas. Dado que la victimización por la delincuencia se incluye en el modelo del Gráfico 3 y el coeficiente de la edad no cambia significativamente, la teoría anterior pierde mérito. Por tanto, se propone una segunda explicación. Las políticas punitivas en América Latina han probado ser contraproducentes para el objetivo de reducir la delincuencia, en tanto el encarcelamiento masivo ha hecho del hacinamiento en las cárceles el caldo de cultivo para las organizaciones criminales²⁵. Puede ser que las personas más adultas, al tener más experiencia directa con los efectos de estas políticas fallidas, tienen menos probabilidad de respaldarlas. Sin embargo, claramente, es necesario más trabajo para desarrollar y poner a prueba los mecanismos que explican la asociación entre edad y menor apoyo a las políticas más punitivas.

Con respecto a otras variables en el modelo, la variable de género sigue siendo estadísticamente significativa, donde se predice que las mujeres apoyen en 0.1 puntos más las políticas punitivas. La primera teoría respaldando esta relación, como en el caso de la edad, estaba basada en la conexión entre victimización por la delincuencia y la inseguridad. Dado que se controla por estas variables en el modelo y el coeficiente no cambia, se considera que la segunda teoría tiene más apoyo. Se cree que el apoyo de las mujeres por políticas punitivas más fuertes se relaciona con el trabajo de Aviel (1981) y Morgan (2015), quienes encuentran que la opinión pública de las mujeres en América Latina tiende a ser más conservadora que la de los hombres. También se encuentra, sin embargo, que el apoyo de las mujeres a políticas más punitivas puede ir más allá del miedo a la victimización de un grupo y venir de actitudes complejas de venganza debido a la permanente victimización que enfrentan como grupo²⁶.

Las medidas del nivel de educación, los quintiles de riqueza, y la residencia urbana/rural siguen sin tener una relación significativa con las actitudes sobre castigos más fuertes para los delincuentes. La riqueza es estadísticamente significativa en el modelo expandido, pero con una correlación positiva moderada (0.1) entre el aumento de los quintiles de

riqueza y el apoyo a castigos más fuertes. Inicialmente se sospechaba que la riqueza jugaría un papel en las diferencias en la exposición a la delincuencia, sin embargo esta relación no es estadísticamente significativa en este análisis²⁷.

Se considera que las investigaciones futuras debieran enfocarse en cómo los factores económicos y sociales pueden afectar el apoyo a políticas punitivas. Como mostró la literatura anterior, las personas responden a las amenazas a sus posiciones sociales y económicas con agresión. d'Anjou y col. (1978) sugiere que, por ejemplo, el cambio social que pudiera aumentar el poder de las minorías, de tal forma que pudieran representar una mayor amenaza para los grupos dominantes, podrían explicar actitudes como el apoyo a mayores castigos. En el contexto de los 90s, Platt (2001) explica que los cortes drásticos en el presupuesto del gobierno y el desempleo fueron importantes al analizar las actitudes de los ciudadanos frente a tener castigos más fuertes y la sensación generalizada de inseguridad respecto a su bienestar. Esta es una perspectiva interesante de la opinión pública sobre la delincuencia y las políticas de prevención, la cual encuentra que está determinada indirectamente por el nivel de bienestar y prosperidad económica, e involucra preguntas importantes sobre la estabilidad de las posiciones políticas de las personas.

Conclusión

Aquellos que han sido victimizados recientemente por la delincuencia, que se sienten inseguros, que tienen más confianza en la policía, y que son mujeres, tienen una mayor probabilidad de expresar un mayor apoyo a políticas punitivas dentro del sistema de justicia, mientras que la edad está altamente asociada con un menor apoyo a estrategias más punitivas. La educación, la residencia urbana versus rural, el nivel de riqueza, y casi todas las categorías de raza/etnicidad (con la excepción de quienes se identifican como negros) no tienen significancia estadística frente al apoyo o la oposición a estrategias punitivas más severas para reducir la delincuencia.

Entender el apoyo público hacia políticas más punitivas (versus otras) es importante desde el punto de vista de las políticas públicas, en la medida que investigaciones indican que los tipos de estrategias más agresivas que han sido apoyadas por la mayoría de la población en ALC pudo haber empeorado la situación del crimen organizado, al menos en algunas partes de América Latina²⁸. En otras palabras, las preferencias punitivas entre los ciudadanos, en la medida que sean recogidas por los representantes políticos, podrían generar una dinámica en la que las medidas punitivas fortalecen el crimen organizado, lo cual promueve aún más las actitudes de mano dura entre ciudadanos y políticos. Para evitar esta dinámica, se sugiere que las medidas que pudieran tomarse incluyen el diálogo comunitario que involucre a los más adultos teniendo en cuenta sus perspectivas más moderadas en estos temas. Tales esfuerzos, junto a los esfuerzos para aumentar la seguridad y la educación en la región, pueden reducir el apoyo a políticas públicas punitivas frente a la delincuencia y dirigir el énfasis hacia estrategias más proactivas, antes que reactivas, para enfrentar la delincuencia y la violencia.

Apéndice

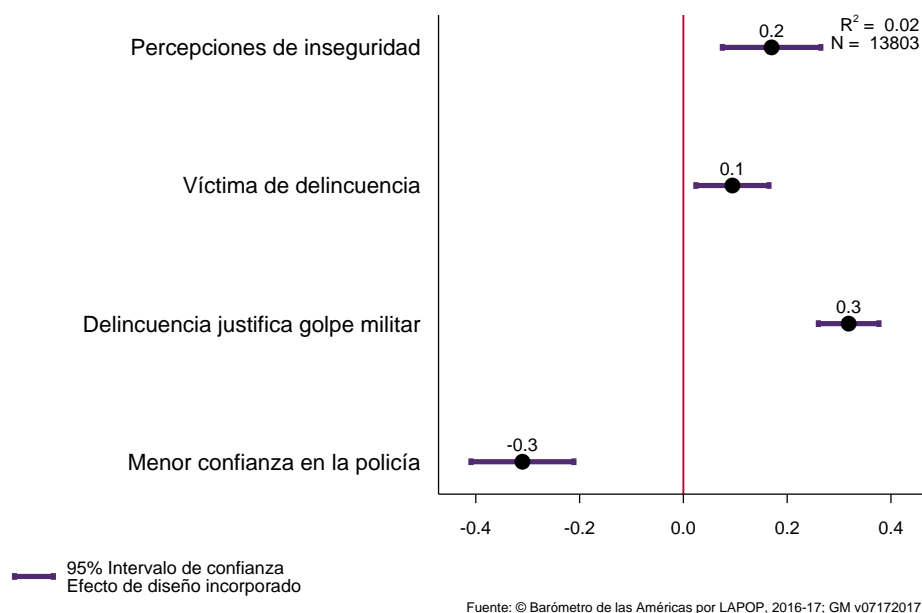


Gráfico 4: Predictores políticos de actitudes punitivas

Notas

1. Singer (2017).
2. La delincuencia se ha expandido tanto en la región que el Banco Interamericano de Desarrollo estima que los efectos directos e indirectos de la delincuencia en América Latina y el Caribe cuestan a la región el 3 % de su PIB anual (Jaitman y col. 2017).
3. Ungar (2003).
4. Ediciones anteriores de la serie *Perspectivas* pueden encontrarse en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop/insights.php>. Los datos usados pueden encontrarse en: <http://www.vanderbilt.edu/lapop>.
5. Las respuestas a la pregunta fueron registradas en una escala de 1 a 7. Para este reporte, se

codificaron las respuestas de 5 a 7 como “de acuerdo” y 4 o menos como “en desacuerdo”.

6. Applegate, Cullen y Fisher (2002).
7. Yagoub (2016).
8. Singer (2017).
9. Ver Aviel (1981); Morgan (2015).
10. Secret y Johnson (1989).
11. Hooker (2005).
12. Macmillan (2001).
13. World Bank (2011), p. 22.
14. Miller, Rossi y Simpson (1986).
15. E.j, Gaviria y Pages (2002).
16. Para los análisis en los Gráficos 2 y 3, se incluyen pero no se muestran los efectos fijos por país.
17. La pregunta usada para recolectar datos sobre la raza reportada por el entrevistado es la siguiente: **ETID**. ¿Usted se considera una persona blanca, mestiza, indígena, negra, mulata, u otra?
18. Miller, Rossi y Simpson (1986) argumenta que quienes se perciben como cercanos a la delincuencia o se ven como potenciales víctimas pueden estar más “inclinados a pedir castigos más fuertes” (317) para los delincuentes, aunque empíricamente encuentran diferencias entre sub-grupos en la intersección del género y la raza.
19. Platt (2001).

20. Worden y McLean (2017).
21. La medida de victimización por la delincuencia se codifica como “1” si las personas reportan ser víctimas de cualquier tipo de delito en los últimos 12 meses al momento de realizar la encuesta y “0” en cualquier otro caso (**VIC1EXT**. Ahora, cambiando el tema, ¿ha sido usted víctima de algún acto de delincuencia en los últimos 12 meses? Es decir, ¿ha sido usted víctima de un robo, hurto, agresión, fraude, chantaje, extorsión, amenazas o **algún otro tipo** de acto delincuencial en los últimos 12 meses?).
22. La variable de inseguridad se miden con la siguiente pregunta: **AOJ11**: Hablando del lugar o el barrio/la colonia donde usted vive y pensando en la posibilidad de ser víctima de un asalto o robo, ¿usted se siente muy seguro(a), algo seguro(a), algo inseguro(a) o muy inseguro(a)? La variable se registra en una escala de cuatro puntos que acá se codifica en una escala de 0 a 1, donde “1” indica mayor inseguridad.
23. La confianza en la policía se refiere a la confianza en la policía nacional. **B18**. ¿Hasta que punto tiene confianza usted en la Policía Nacional? Inicialmente se pregunta en una escala de 1 a 7. Acá se registra de 0 a 1, de tal forma que valores más altos indican *menos* confianza.
24. Análisis adicionales sobre la variable de edad muestran que cuando se divide en quintiles a partir de las cohortes de edad, los grupos de edad 55-66 y 66+ tienen la relación negativa más fuerte con las actitudes punitivas.
25. E.j., Dudley y Bargent (2017).
26. Yagoub (2016).
27. También se examinó la creencia que, bajo algunas circunstancias, un golpe militar puede justificarse (sobre este tema, ver Cassell, Booth y Seligson (2018). Los resultados se muestran en el Gráfico 4 en el Apéndice. Esta relación es estadísticamente significativa, donde la probabilidad de expresar que apoyar un golpe militar puede ser justificado está correlacionado positivamente con el apoyo a castigos más agresivos. Una posible explicación para este resultado es la politización de las fuerzas armadas en América Latina. Kruijt (1996) indica que los latinoamericanos ven las fuerzas armadas cumpliendo un papel político y estabilizador. Dada esta función histórica entre los militares, una persona que respalda castigos más fuertes para estabilizar la criminalidad podría también respaldar un golpe militar dadas sus características históricas. Esta relación sería un tema interesante de investigación. Llama la atención que al incluir esta variable en el modelo cambia el coeficiente de *menos* confianza en la policía a un valor negativo, indicando

una correlación negativa entre la confianza en la policía y apoyo a política punitivas. También reduce significativamente la muestra pues la pregunta se formuló en la mitad de los países. Esto debe ser tratado en futuras investigaciones sobre la opinión pública y las políticas punitivas.

28. Dudley y Bargent (2017).

Referencias

- Applegate, Brandon, Francis Cullen y Bonnie Fisher. 2002. «Public Views Toward Crime and Correctional Policies: Is There a Gender Gap?» *Journal of Criminal Justice* 30:89-100.
- Aviel, JoAnn Fagot. 1981. «Political Participation of Women in Latin America.» *Political Research Quarterly* 34:156-173.
- Bateson, Regina. 2012. «Crime Victimization and Political Participation.» *American Political Science Review* 106 (3): 570-587.
- Bobo, Lawrence, y Frederick C. Licari. 1989. «Education and Political Tolerance: Testing the Effects of Cognitive Sophistication and Target Group Affect.» *Public Opinion Quarterly* 106 (3): 570-587.
- Cassell, Kaitlen, John Booth y Mitchell A. Seligson. 2018. «Support for Coups in the Americas: Mass Norms and Democratization.» *Journal of Latin American Politics and Society* 60 (4): 1-25.
- d'Anjou, L. J. M., C. Cozijn, L. v. d. Toorn y C. M. R. Verkoeyen. 1978. «Demanding More Severe Punishment: Outline of a Theory.» *The British Journal of Criminology* 18 (4): 326-347.
- Dudley, Stephen, y James Bargent. 2017. «The Prison Dilemma: Latin America's Incubators of Organized Crime.» Visitado 9 de mayo de 2019. <https://www.insightcrime.org/investigations/prison-dilemma-latin-america-incubators-organized-crime/>.

- Gaviria, Alejandro, y Carmen Pages. 2002. «Patterns of Crime Victimization in Latin American Cities.» *Journal of Development Economics* 67 (1): 181-203.
- Hooker, Juliet. 2005. «Indigenous Inclusion/Black Exclusion: Race, Ethnicity and Multicultural Citizenship in Latin America.» *Journal of Latin American Studies* 37 (2): 285-310.
- Horowitz, Mardi Jon. 1986. «Stress-Response Syndromes.» *Hospital & Community Psychiatry* 37 (3): 241-249.
- Jaitman, Laura, Dino Capriolo, Rogelio Ochoa Granduillhome, Philip Keefer, Ted Leggett, James Andrew Lewis, José Antonio Mejía Guerra, Marcela Mello, Heather Sutton e Iván Torre. 2017. *The Costs of Crime and Violence: New Evidence and Insights in Latin America and the Caribbean*. Reporte de investigación. Inter-American Development Bank. Visitado 9 de mayo de 2019. <https://publications.iadb.org/en/costs-crime-and-violence-new-evidence-and-insights-latin-america-and-caribbean>.
- Johnson, Devon. 2009. «Anger about Crime and Support for Punitive Criminal Justice Policies.» *Punishment & Society* 11 (1): 51-66.
- Kruijt, Dirk. 1996. «Politicians in Uniform: Dilemmas about the Latin American Military.» *European Review of Latin American and Caribbean Studies* 61:7-19.
- Macmillan, Ross. 2001. «Violence and the Life Course: Dilemmas about the Latin American Military.» *Annual Review of Sociology* 27:1-22.
- Miller, J. L., Peter H. Rossi y Jon E. Simpson. 1986. «Perceptions of Justice: Race and Gender Differences in Judgments of Appropriate Prison Sentences.» *Law & Society Review* 20 (3): 313-334.
- Morgan, Jana. 2015. «Gender and the Latin American Voter.» En *The Latin American Voter: Pursuing Representation and Accountability in Challenging Contexts*, editado por Ryan E. Carlin, Matthew M. Singer y Elizabeth J. Zechmeister, 143-168. Ann Arbor: University of Michigan Press.

- Platt, Anthony. 2001. «Social Insecurity: The Transformation of American Criminal Justice, 1965-2000.» *Social Justice* 28 (1): 138-155.
- Riggs, David, Costance Dancu, Beth Gershuny, Deborah Greenber y Edna Foa. 1992. «Anger and Post-Traumatic Stress Disorder in Female Crime Victims.» *Journal of Traumatic Stress* 5:613-625.
- Secret, Phillip, y James Johnson. 1989. «Racial Differences in Attitudes toward Crime Control.» *Journal of Criminal Justice* 17 (5): 361-375.
- Singer, Matthew. 2017. «Crime, Violence, and the Police in the Americas.» Capítulo 4 en *The Political Culture of Democracy in the Americas* 2016/17, editado por Mollie Cohen, Noam Lupu y Elizabeth Zechmeister, 69-100. https://www.vanderbilt.edu/lapop/ab2016/AB2016-17_Comparative_Report_English_V2_FINAL_090117_W.pdf.
- Ungar, Mark. 2003. «Prison and Politics in Contemporary Latin America.» *Human Rights Quarterly* 25 (4): 909-934.
- Worden, Robert, y Sarah McLean. 2017. *Mirage of Police Reform: Procedural Justice and Police Legitimacy*. Oakland: University of California Press. California.
- World Bank. 2011. *Crime and Violence in Central America : A Development Challenge*. Reporte de investigación. World Bank. Visitado 10 de mayo de 2019. <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/2744>.
- Yagoub, Mimi. 2016. «Why Does Latin America Have the World's Highest Female Murder Rates?» Visitado 9 de mayo de 2019. <https://www.insightcrime.org/news/analysis/why-does-latin-america-have-the-world-s-highest-female-murder-rates/>.



Sophie Price (sophie.c.price@vanderbilt.edu) es estudiante de pregrado en Vanderbilt University, originaria de Fort Smith, Arkansas. Estudia Ciencia Política con énfasis en Teoría Política.

Stella Sechopoulos (stella.e.sechopoulos@vanderbilt.edu) es estudiante de pregrado Vanderbilt University, originaria de Atenas, Grecia. Estudia Economía y Ciencia Política con énfasis en el Gobierno de Estados Unidos.

James Whitty (james.i.whitty@vanderbilt.edu) es estudiante de pregrado de Vanderbilt University, originario de Millburn, New Jersey. Realiza Estudios Judíos e Inglés con énfasis en estudios literarios.

LAPOP se complace en hacer notar que este reporte fue desarrollado y escrito por estudiantes de pregrado que participaron en un seminario de honores de Vanderbilt University en el otoño de 2018. Dicha clase, HONS1830W, fue dictada por la profesora Elizabeth Zechmeister, y Claire Evans actuó como asistente de enseñanza.

Este reporte fue editado por el Dr. Mitchell A. Seligson y la Dra. Elizabeth J. Zechmeister. La auditoría de este reporte fue hecha por el Dr. Oscar Castorena. Este reporte fue traducido por el Dr. Juan Camilo Plata y Rubí Arana. El formato, la producción, la revisión, los gráficos y la distribución del reporte fueron manejados por Rubí Arana, Alexa Rains, Laura Sellers y el Dr. Zach Warner. Nuestros datos e informes están disponibles para su descarga gratuita en el sitio web del proyecto. Síguenos en Twitter o Facebook para mantenerse en contacto.

Como miembro fundador de la iniciativa de transparencia de la Asociación Americana para la Investigación de la Opinión Pública (AAPOR), LAPOP se compromete a la divulgación rutinaria de nuestros procesos de recopilación de datos y presentación de informes. Se puede encontrar más información sobre los diseños de la muestra del Barómetro de las Américas en vanderbilt.edu/lapop/core-surveys.

Este reporte de *Perspectivas* ha sido posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos de América a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y Vanderbilt University. Las opiniones expresadas en este reporte de *Perspectivas* corresponden a los autores y LAPOP y no reflejan necesariamente el punto de vista de USAID, del Gobierno de los Estados Unidos o cualquiera de las otras instituciones financiadoras. Las encuestas del Barómetro de las Américas de LAPOP son financiadas principalmente por USAID y Vanderbilt University. La ronda 2016/17 también tuvo el apoyo del BID, el PNUD, la Open Society Foundations y varios socios académicos e investigadores a lo largo de las Américas.

vanderbilt.edu/lapop-español
@lapop_barometro
@LatinAmericanPublicOpinionProject
lapop@vanderbilt.edu
+1-615-322-4033



230 Appleton Place, PMB 505, Suite 304, Nashville, TN 37203, USA